

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**



**RAMA JUDICIAL**

**TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**

**Medellín, treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintitrés (2023)**

Apelación auto

Exp. 05001-31-05-013-2021-00187-01

La Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, integrada por los Magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES (ponente), VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO y SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE, vencido el término de traslado establecido en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, procede a dictar la decisión correspondiente frente al recurso de apelación interpuesto por AEXPRESS S.A.S. hoy en reorganización, frente al auto que decidió no declarar la nulidad propuesta, dentro del proceso ordinario laboral que adelanta en su contra GABINO QUIÑONES OLMEDO, VIVIANA PATRICIA CORREA PEÑA, EDILSON ANTONIO FRANCO MARULANDA y GLORIA DERLY VÉLEZ RODRÍGUEZ.

**ANTECEDENTES:**

Dentro del desarrollo de las etapas procesales, en espera a la realización de la audiencia del artículo 77 del CPTSS, la pasiva arrió un escrito solicitando la nulidad del trámite por indebida integración del contradictorio con el promotor designado dentro del proceso de reorganización empresarial que se emprendió a partir del Auto 2021-01-718064 del 09 de noviembre de 2021 donde se dio la admisión, advenimiento que considera implica la conformación de un litisconsorcio necesario donde debe darse garantía a la defensa y debido proceso de este escogido por la Superintendencia de Sociedades.

Dentro de la realización de la audiencia, en su respectiva etapa de saneamiento, el apoderado adicionó tal solicitud, reclamando una falta de competencia por razón de la cuantía por considerar que el trámite adecuado que debe darse al proceso es uno de única instancia por motivo de la valoración de las pretensiones que desde el escrito de demanda se observan.

En el juicio de la referencia, el Juzgado de conocimiento, que lo es el Trece Laboral del Circuito de Medellín, en providencia dictada el 02 de marzo de 2023, no accedió a la declaratoria de nulidad formulada por la convocada, otorgando frente al primer punto varias razones: 1. Que el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006 estipuló como causal de nulidad la continuación de los procesos de ejecución o cobro sin ser remitidos para ser incorporados al trámite de reorganización, encontrando ello ajeno a la causa por estar ante un proceso declarativo. 2. Conforme a lo que tiene plasmado el artículo 135 del CGP la demandada no tiene legitimidad para proponer la nulidad en virtud de haber omitido alegarla como excepción previa contando con la oportunidad para ello. 3. El promotor nombrado no tiene condición de litisconsorte necesario por no tener pertenencia con la relación jurídico sustancial que se discute, precisando que de haber éxito en las pretensiones de la demanda, el promotor debe ceñirse a las reglas de la reorganización y a las directrices del juez del concurso, no encontrando obligatoria su presencia en el trámite. Sobre la falta de competencia adujo que la misma dejó de ser causal de nulidad desde la implementación del CGP, tampoco se alegó como excepción previa y no evidenció ningún yerro en el trámite porque bajo la potestad que tiene el despacho para realizar un control de legalidad aun cuando la activa promovió la acción determinando el proceso como uno de única instancia, lo que revelan las pretensiones es que superan los 20 SMLMV, lo que otorga competencia al Juez de Circuito y conlleva a que el procedimiento adoptado sea el de doble instancia.

Contra dicha decisión la pasiva interpuso el recurso de apelación, insistiendo en la nulidad propuesta, en tanto considera por un lado necesaria la integración del promotor elegido dentro del proceso de reorganización porque de salir adelante las pretensiones si habría lugar a unos perjuicios patrimoniales a su cargo, además que la Ley 1116 de 2006 da cabida a una posible solidaridad

frente a las condenas, sin que hubiera sido posible proponer la excepción previa en este sentido dado que el nombramiento se dio para noviembre de 2021; y por el otro, aduce alejarse de la postura que suma todas las pretensiones de cada demandante para arribar al monto total y determinar la cuantía del proceso, lo que enfatiza no se hizo desde el escrito de demanda.

En el término pertinente, las partes presentaron sus alegaciones de segunda instancia, con argumentos semejantes a los expuestos en las etapas procesales transcurridas en primer grado.

### **CONSIDERACIONES:**

A partir del tema objeto de apelación, le corresponde a esta Colegiatura dilucidar si se configuran o no las causales de nulidad por no estar integrada debidamente la pasiva y dilucidarse una falta de competencia en razón de la cuantía.

Al respecto, sea lo primero destacar que esta Sala de decisión es competente para resolver el asunto planteado por lo previsto en el numeral 6 del artículo 65 del CPT y la SS, según el cual, el auto que decide sobre nulidades procesales, es recurrible vía apelación.

En lo que atañe al litisconsorcio necesario por pasiva, se tiene que esta figura se encuentra prevista en el artículo 61 del CGP aplicable por remisión del 145 del CPT y la SS, disposición normativa que señala que es necesaria la vinculación de las personas (naturales o jurídicas) cuando el proceso verse sobre relaciones o actos jurídicos respecto de los cuales, por su naturaleza o por disposición legal haya de resolverse de manera uniforme y no sea posible decidir de mérito sin su comparecencia, por ser sujetos de tales relaciones o haber intervenido en dichos actos, falta de integración que genera la nulidad de la decisión de primer grado, pues así lo dispuso el legislador en el parágrafo 5 del artículo 134 del CGP, ya que naturalmente, si lo que se busca con esta figura, es que en el proceso se dé una solución uniforme al problema jurídico sometido a la jurisdicción para todos los que intervinieron en la relación

jurídico-sustancial, la ausencia de alguno de estos, no permite la validez de la sentencia.

En el asunto, atendiendo la naturaleza del trámite es claro y patente que lo que se busca es la determinación de una relación jurídico sustancial respecto de la demandada en su presunta calidad de empleadora, a quien se procura atribuir el reconocimiento de salarios, prestaciones sociales, vacaciones e indemnizaciones por despidos sin justa causa, determinación que parte de unos hechos que no involucran de ninguna manera al señor Nelson Jesús Ramírez como representante legal de la sociedad o promotor delegado dentro del proceso de reorganización, encontrando que en esas calidades ninguna injerencia o participación tuvo en el alegado vínculo, lo que conlleva a razonar que en últimas la sentencia no puede llegar a perjudicarlo o beneficiarlo, ni su responsabilidad limitada por un lado, a la representación de la persona jurídica demandada en el marco de las facultades y limitaciones establecidas en el Certificado expedido por la Cámara de Comercio (Págs. 22-30 Archivo 03), que se enfatiza, se encuentra debidamente vinculada; y por otro, a la de participar a partir de diciembre de 2021 como promotor (Págs. 8-16 Archivo 24) en la negociación, análisis, diagnóstico y elaboración de los acuerdos de reorganización de la sociedad con intervención indelegable en las audiencias, emisión y difusión de información financiera, administrativa, contable o de orden legal<sup>1</sup>, da lugar a hacerlo parte de la litis, en tanto el hecho sobreviniente de su delegación en nada modifica la ruta procesal, porque guarda implicación es en el ámbito del trámite concursal para efectos de normalizar sus relaciones comerciales y crediticias, mediante su reestructuración operacional, administrativa, de activos o pasivos, por lo que de cobrar prosperidad lo pedido únicamente se halla atado a lo previsto en la Ley 1116 de 2006, pero de manera alguna puede pregonarse que se prive de su derecho de defensa o contradicción, pues ello radica en la enjuiciada a cargo de quien se endilgan los conceptos laborales.

Ahora, el recurrente advierte la imposibilidad de ser totalizadas las pretensiones de todos los demandantes a fin de definir la competencia del

---

<sup>1</sup> Artículo 2.2.2.11.1.1 Decreto 2130 de 2015

asunto, debiendo precisarse al respecto que atendiendo a que la cuantía es un criterio de carácter objetivo que determina la competencia del juez, y tiene relación con el valor o trascendencia económica de la relación jurídica, debe atenderse lo comprendido en el artículo 12 del CPTSS que delimita el valor de las pretensiones en 20 SMLMV para que sea el Juez del Circuito el que conozca los procesos que excedan ese tope y también es viable acudir al artículo 26 del CGP que en su numeral 1° predica: *“la cuantía se determinará así: 1. Por el valor de todas las pretensiones al tiempo de la demanda, sin tomar en cuenta los frutos, intereses, multas o perjuicios reclamados como accesorios que se causen con posterioridad a su presentación”* en coherencia con lo dispuesto en el artículo 25A del CPTSS que refiere en uno de sus incisos que *“también podrán formularse en una demanda pretensiones de varios demandantes contra el mismo o varios demandados cuando provengan de igual causa, o versar sobre el mismo objeto o deban servirse de las mismas pruebas aunque sea diferente el interés jurídico”*.

En efecto, se trata de intereses disímiles acumulados en igual escrito de demanda, atendiendo a la coincidencia en los elementos que cita el artículo previamente transcrito, lo que no quiere decir que deba asumirse como un solo asunto a resolver, sino que al poder tramitarse bajo igual procedimiento, se despliega un único trámite judicial, pero las cuestiones continúan teniendo el carácter de individuales, siendo desatinado permitir que ante un caso donde las pretensiones no se elevan a los 20 SMLMV, bajo iguales condiciones se acojan otros que por su sumatoria los alcance y releven el trámite de única instancia para dar entrada a uno de primera instancia donde con diferencia el uno del otro, en el de mayor cuantía se manifiesta la garantía constitucional de la doble instancia<sup>2</sup> precisamente por el valor pecuniario que se compromete.

Lo anterior quiere decir, que el legislador permitió la acumulación de pretensiones bajo determinados supuestos para dar práctica al principio de economía procesal, pero ello de modo alguno da lugar a que se modifique el procedimiento primigenio que se daría a cada asunto de manera individual en razón a la cuantía, el que ha de mantenerse por la naturaleza de lo perseguido

---

<sup>2</sup> Artículo 31 Carta Política.

por cada petente y que no se altera por el solo hecho de unirlos para que bajo igual diligencia se definan las consecuencias jurídicas de lo planteado. Y las razones para ello estriban en que, por tratarse de un litisconsorcio facultativo, cada uno debe considerarse como un litigante independiente y separado y los actos de cada uno de ellos no redundan en provecho ni en perjuicio de los otros.

De permitirse lo anterior, se burla la intención legislativa de cara a asegurar la correcta administración de justicia y debido proceso, cuya excepción para los procesos de menor cuantía a los 20 SMLMV están acordes a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, por lo que estaría vedado de toda igualdad, que de presentarse cada demanda por separado, se impulse la gestión bajo los parámetros de un proceso de única instancia, pero que por integrarse a varios suplicantes en el escrito inicial se permita que los afectados tengan una oportunidad para que la resolución que se adopte sea revisada y corregida por el superior.

Es importante precisar que es verdad, que la demandada en los términos del artículo 135 del CGP en principio y atendiendo el trámite dado por la operadora de instancia, estaba proscrita de alegar la nulidad por haber omitido formularla como excepción previa, porque atendiendo la verificada notificación en debida forma de la demanda, debió acudir al numeral 1° del artículo 100 del CGP como medio de defensa en el momento de arribar su contestación, sin que así haya ocurrido en el término que para ese propósito otorga la ley, pero es que la falta de competencia por el factor objetivo que se relaciona con la naturaleza del negocio y su cuantía, genera una nulidad insaneable que, por consiguiente, puede ser alegada en cualquier momento, incluso en la segunda instancia y debe ser reconocida, de oficio, por el juez, en ejercicio de su deber de control permanente de legalidad -artículo 42 CGP-, por lo que una vez identificado por esta colegiatura que en efecto, el proceso se ha surtido por quien es incompetente para ello, no hay otro camino que para no afectar el núcleo esencial del debido proceso dar prosperidad a la nulidad basados en los fundamentos de competencia expuestos.

Bajo ese análisis, considera la Sala que en este aspecto si asiste razón al apelante, por encontrar que con realización del cálculo de lo pretendido por cada demandante anexo a esta providencia, para ninguno de las cuestiones discutidas aun incluyendo la indemnización por falta de pago del artículo 65 del CST, se supera el tope de \$18.170.520 que equivale a 20 SMLMV para el año 2021 para cuando se dio impulso a esta demanda, lo que denota que la competencia radica es en los Jueces Municipales de Pequeñas Causas Laborales de Medellín y por tanto, se procederá a declarar la NULIDAD alegada por falta de competencia en razón de la cuantía, lo que implica la remisión del expediente a la oficina de reparto para la distribución al competente con la debida comunicación de lo decidido al Juzgado de Circuito, advirtiéndose que conforme a lo normado en el artículo 16 del CGP lo actuado conservará validez sin irrespeto a las formas establecidas para tal procedimiento, lo que se justifica en el hecho de que todos los jueces cuentan con jurisdicción, por lo que no se afectan los derechos de los justiciables.


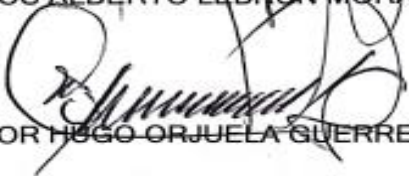

Sin costas por los resultados del recurso.

#### **DECISIÓN:**

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, la Sala Quinta de Decisión Laboral, **REVOCA** el auto objeto de apelación, de fecha y procedencia conocidas para en su lugar **DECLARAR LA NULIDAD** de lo actuado a partir del auto que admitió la demanda el 27 de mayo de 2021, disponiendo la remisión de las diligencias a los Jueces Municipales de Pequeñas Causas Laborales de Medellín (Reparto) con comunicación de lo decidido al Juzgado de Circuito, con la advertencia que lo actuado conserva plena validez.

La presente decisión queda notificada en los **ESTADOS ELECTRÓNICOS**.

Los Magistrados,

  
CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES  
  
VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO  
  
SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE

Se certifica: Que la sentencia anterior fue notificada por  
ESTADOS N° 057 fijados el 10 de abril de 2023  
En la página web de la rama judicial a las 8 a.m.

---

El secretario.



ANEXO

	SAL-PRESTAC- DESPIDO	MORA	TOTAL
DEMANDANTE 1	\$ 5.025.547	\$ 4.882.636	\$ 9.908.183
DEMANDANTE 2	\$ 4.092.922	\$ 5.325.338	\$ 9.418.260
DEMANDANTE 3	\$ 2.736.516	\$ 6.788.343	\$ 9.524.859
DEMANDANTE 4	\$ 2.695.086	\$ 6.788.343	\$ 9.483.429